

TELECOM PERSONAL S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROLDAN -RECURSO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO  
DE INCONSTITUCIONALIDAD

Cita: 475/20

Nº Saij:

Nº expediente:

Año de causa: 0

Nº de tomo: 299

Pág. de inicio: 142

Pág. de fin: 152

Fecha del fallo: 23/06/2020

Juzgado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Santa Fe) - Santa Fe

Jueces

Daniel Aníbal ERBETTA

Roberto Héctor FALISTOCCO

Rafael Francisco GUTIERREZ

Eduardo Guillermo SPULER

Tesaurus > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > OBJETO

Tesaurus > EXTREMOS DE LA LITIS

Tesaurus > TASA POR INSPECCION DE ANTENAS

Tesaurus > ACTO ADMINISTRATIVO > LEGITIMIDAD

CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. OBJETO. EXTREMOS DE LA LITIS. TASA POR  
INSPECCION DE ANTENAS. LEGITIMIDAD

La actora insiste en intercalar con las cuestiones actuales otras cuestiones que fueron objeto de procesos anteriores ya firmes y consentidos mas no se hace cargo de lo expuesto por los Sentenciantes que delimitaron la materia litigiosa en torno a la legitimidad de la tasa por inspección de antenas respecto del período fiscal 2010 a 2014 en razón de que todo lo relacionado con la multa dispuesta por resolución 1003/15 se resolvió con el dictado de un decreto del Intendente municipal que la dejó expresamente sin efecto. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución 1003/15 y Decreto 1214/15 de la Municipalidad de Roldán.

Tesaurus > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD

Tesaurus > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO  
CONSTITUCIONAL > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA

Tesaurus > SENTENCIA > FUNDAMENTOS SUFICIENTES

Tesaurus > TASA POR INSPECCION DE ANTENAS

Tesaurus > MUNICIPALIDAD > FACULTADES

Tesaurus > PODER DE POLICIA

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. SENTENCIA

**SUFICIENTEMENTE FUNDADA. TASA DE INSPECCION DE ANTENAS. MUNICIPALIDAD. FACULTADES. PODER DE POLICIA**

Los reproches formulados al pronunciamiento impugnado denotan el disenso en torno a la tesis sostenida por los Sentenciantes, quienes analizaron la situación planteada en autos y llegaron a la conclusión de que, en el caso, el tributo por inspección de antenas por el período 2010/2014 resultaba legítimo, ya que las prescripciones de las Ordenanzas de Roldán 524/07 y 528/07, no traspasaban los límites que el Municipio tiene impuestos, en tanto se correspondían con atribuciones inherentes a los mismos; que el establecimiento de requisitos para la instalación de antenas resultaba competencia de la autoridad municipal; que la jurisprudencia tiene resuelto uniformemente que es competencia de los municipios el permiso y habilitación para la instalación de antenas para difusión del servicio de telefonía celular y que, en definitiva, la norma cuestionada resultaba del legítimo ejercicio del Poder de Policía municipal de la Municipalidad de Roldán en materia de higiene, seguridad, orden social y ambiental, no resultando un ejercicio arbitrario de tal potestad. -

**REFERENCIAS NORMATIVAS:** Constitución nacional, artículo 41; Ley 2756, artículo 39, inciso 27; Ordenanzas 524/07 y 528/07 de la Municipalidad de Roldán.

Tesauo > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD  
Tesauo > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO CONSTITUCIONAL > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA  
Tesauo > SENTENCIA > FUNDAMENTOS SUFICIENTES  
Tesauo > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROVINCIAL > JURISPRUDENCIA VINCULANTE  
Tesauo > MUNICIPALIDAD > FACULTADES  
Tesauo > PODER DE POLICIA  
Tesauo > MUNICIPALIDAD > PERMISO DE EDIFICACION > ANTENA DE TELEFONIA CELULAR  
Tesauo > MUNICIPALIDAD > HABILITACION MUNICIPAL

**CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO**

**RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL. JURISPRUDENCIA VINCULANTE. MUNICIPALIDAD. FACULTADES CONCURRENTES. PODER DE POLICIA. PERMISO DE EDIFICACION. ANTENA DE TELEFONIA CELULAR. HABILITACION MUNICIPAL**

La compareciente insiste en que no correspondería a la Municipalidad demandada el ejercicio del poder de policía para habilitar, inspeccionar y/o controlar la actividad de telecomunicaciones desarrollada y/o sus instalaciones, sino a la Comisión Nacional de Comunicaciones, en oposición al criterio de la Alzada, que rebatió tales reproches destacando lo dicho por la Corte federal en referencia al artículo 41 de la Constitución nacional en autos "Villivar" respecto de que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la reglamentación complementada, y de ahí que en este ámbito no cuadre predicar una exclusividad del organismo nacional por cuanto la complementación viene constitucionalmente impuesta. -  
**CITAS:** CSJN: Villivar, del 17.4.2007. - **REFERENCIAS NORMATIVAS:** Constitución nacional, artículo 41.

Tesauo > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD  
Tesauo > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO CONSTITUCIONAL > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA  
Tesauo > SENTENCIA > FUNDAMENTOS SUFICIENTES  
Tesauo > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL > JURISPRUDENCIA NO APLICABLE  
Tesauo > TASA POR INSPECCION DE ANTENAS  
Tesauo > ORDENANZA MUNICIPAL  
Tesauo > NOTIFICACION > PRINCIPIO DE CONOCIMIENTO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL. JURISPRUDENCIA NO APLICABLE. TASA POR INSPECCION DE ANTENAS. ORDENANZA MUNICIPAL. NOTIFICACION. PRINCIPIO DE CONOCIMIENTO.

La recurrente repele el cobro de la tasa invocando la violación del principio de defensa en juicio por falta de publicación de las supuestas normas pero no logra conmover los fundamentos del Tribunal, que luego de analizar el fallo del Alto Tribunal nacional invocado por la actora ("Municipalidad de Berazategui", del 27 de setiembre de 2018), concluyó que no resultaba sin más trasladable a la realidad del caso que exhibía aspectos jurídicos y fácticos propios y diferenciables de los que pudieron haber deparado otras actuaciones; y puso de resalto que la Municipalidad notificó a la empresa las Ordenanzas municipales 524/07 y 528/07 ya con la sustanciación de los anteriores expedientes habidos entre las mismas partes aquí contendientes, por lo cual mal puede decir la empresa que no conoce el íntegro texto de las ordenanzas precipuas, máxime cuando de la voluminosa pieza de la demanda se desgrana un conocimiento acabado de sus disposiciones, no logrando la recurrente -con sus alegaciones genéricas y la jurisprudencia que invoca- conmover la comprobada existencia de anoticiamiento cabal de la normativa en cuestión. - CITAS: CSJN: Municipalidad de Berazategui, del 27.9.2018. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ordenanzas 524/07 y 528/07 de la Municipalidad de Roldán.

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD  
Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO CONSTITUCIONAL > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA  
Tesouro > SENTENCIA > FUNDAMENTOS SUFICIENTES  
Tesouro > TASA POR INSPECCION DE ANTENAS  
Tesouro > MUNICIPALIDAD > FACULTADES > LIMITES

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA. TASA DE INSPECCION DE ANTENAS. CONSTITUCIONALIDAD. CODIGO FISCAL MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD. FACULTADES. LIMITES

La compareciente achaca al fallo impugnado el haber incurrido en autocontradicción y contener falsas afirmaciones, insistiendo en la inconstitucionalidad de la tasa de inspección de antenas, la que no surge taxativamente del Código Fiscal Municipal aprobado por la ley 8173, más lo cierto es que no logra rebatir con sus genéricas afirmaciones lo argumentado por la Cámara, que comenzó recordando la amplitud del artículo 107 de nuestra Constitución provincial y señaló que la posterior ley 8173 no significó que los Municipios debieran igualar o reproducir ad pedem litterae lo prescripto por ella con una copia exacta de los tributos allí diseñados, para concluir que los Municipios no están obligados a seguir a pie juntillas las disposiciones de la ley 8173 aunque tienen ciertamente contornos definidos a la hora de establecer sus tributos y que no pueden traspasar, no pudiendo dictar normativas que resulten inconciliables con las prescripciones de la ley 8173. Asimismo, ponderó que la ley 8173 es anterior a la reforma constitucional de 1994 la que conduce a una ampliación de las potestades tributarias de los Municipios e indicó que la lectura e interpretación que se efectúe de la ley 8173 debe ser leída en clave constitucional, es decir, en el supuesto en el que la norma de inferior grado resulta ser más antigua que las de mayor jerarquía. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 8173.

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD  
Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO CONSTITUCIONAL > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA

Tesouro > SENTENCIA > FUNDAMENTOS SUFICIENTES  
Tesouro > TASA POR INSPECCION DE ANTENAS > PRESTACION DEL SERVICIO  
Tesouro > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL > CRITERIO RECTOR

#### CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA. TASA POR INSPECCION DE ANTENAS. PRESTACION DEL SERVICIO. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL. CRITERIO RECTOR

En cuanto a la falta de prestación de servicios que aduce la empresa recurrente, cabe recordar que a los fines de la exigibilidad del cobro de la tasa se ha entendido suficiente la organización del servicio, así como su ofrecimiento a los eventuales contribuyentes, resultando legítimo su cobro desde el momento en que el Fisco incurre en erogaciones para organizar la prestación, la que debe encontrarse a disposición de los particulares, independientemente del uso efectivo que de ella realicen. Con mayor peso argumentativo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago (de las tasas) aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en miras el interés general. - CITAS: CSJN: Fallos 251:50; 312:1575; 323:3770; y 326:4251. - DOCTRINA: Villegas, Héctor "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2016, pág. 135.

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD  
Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO CONSTITUCIONAL > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA  
Tesouro > SENTENCIA > FUNDAMENTOS SUFICIENTES  
Tesouro > REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL  
Tesouro > MUNICIPALIDAD > FACULTADES > LIMITES  
Tesouro > IMPUESTOS > DOBLE IMPOSICION

#### CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA. REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL. MUNICIPALIDAD. FACULTADES. LIMITES. IMPUESTO. DOBLE IMPOSICION

Respecto a la supuesta violación de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la Cámara recordó que la obligación de no gravar establecida por la ley deja a salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados; que en la especie ya se había explicado que no se requirió habilitación correspondiente y que no podía afirmarse que no se han prestado servicios, para concluir que no se había demostrado acabadamente que la Municipalidad haya gravado con un tributo local la materia gravada por un tributo nacional.

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD  
Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO CONSTITUCIONAL > OMISION DE CONSIDERAR CUESTION PROPUESTA  
Tesouro > INTERESES MORATORIOS  
Tesouro > LEY > INTERPRETACION

#### CONSTITUCIONAL - CIVIL

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. CUESTION NO CONSTITUCIONAL. OMISION DE CONSIDERAR CUESTION PLANTEADA. INTERESES

## MORATORIOS. LEY. INTERPRETACION

En cuanto a la mora no culpable que propuso la empresa para eximirse de los intereses, la Cámara desestimó tal argumento recordando que tales intereses no constituyen, en principio, una sanción sino resarcimiento de daños e indemnización del daño moratorio y que su fin consiste en la reparación, y dio expreso tratamiento a las referencias del recurrente sobre su actitud prudente y diligente, en respuesta a las cuales el Tribunal resolvió que la posición clásica bordada alrededor del art. 509 del Código Civil ha dejado paso a una cada vez más nutrida doctrina en el sentido que los supuestos más importantes y frecuentes se caracterizan por la presencia de un factor objetivo de atribución y son, consecuentemente, hipótesis de mora objetiva, posición esta última que había sido sostenida ya alrededor del mencionado artículo y, a fortiori, en relación al artículo 888 del nuevo Código Civil y Comercial, lo que deja sin sustento los reproches sobre omisión de adecuado tratamiento de este agravio. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 509; Código Civil y Comercial, artículo 888.

### Texto del fallo

Reg.: A y S t 299 p 142/152.

Santa Fe, 23 de junio del año 2020.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad y casación interpuesto por la actora contra la resolución 191 del 9 de mayo de 2019, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario -integrada- en autos "TELECOM PERSONAL S.A. contra MUNICIPALIDAD DE ROLDÁN - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - (EXPTE. 60/16 - CUIJ 21-17455050-3)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00512685-9); y,

### CONSIDERANDO:

1. Mediante pronunciamiento número 191 del 9 de mayo de 2019 la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario -integrada- declaró improcedente la demanda interpuesta por Telecom Personal S.A. contra la Municipalidad de Roldán tendente a impugnar el Decreto N° 1214 del Intendente municipal de fecha 25.08.2015 que dejó sin efecto las disposiciones de la Resolución N° 1003/15 y reclamó a la compañía el pago de una deuda en concepto de Tasa de Inspección de Estructuras Soporte de Antenas por los períodos fiscales 2010 a 2014, con más intereses y costas (fs. 2/3v.).

Contra dicha resolución la accionante interpone sus recursos de inconstitucionalidad y casación (fs. 36/69).

Funda su impugnación en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055 y en el artículo 37 de la ley 11330.

En lo que refiere a la procedencia sustancial de los recursos aduce que la sentencia impugnada incurre en arbitrariedad sorpresiva con grave afectación de la legalidad, de reserva de la ley,

del derecho de propiedad, de la seguridad jurídica y del principio de razonabilidad, y es por tal arbitrariedad que solicita la anulación del pronunciamiento impugnando vía casación o por declaración de inconstitucionalidad.

Para así sostenerlo, asevera que el fallo recurrido se aparta manifiestamente de la norma aplicable y de los hechos comprobados en el expediente, violando principios fundamentales que afectan sus derechos constitucionales. En tal sentido, cuestiona que la sentencia indicara que dado que el Municipio dejó de lado la multa, el debate había quedado acotado a la procedencia del tributo -tasa de inspección de antenas-, desconociendo lo que su parte planteó en el expediente N° 130/15 sobre medida cautelar en cuanto que resultaba aplicable el artículo 29 de la ley 11330 respecto de la satisfacción extraprocesal de la pretensión.

Se agravia de que no ha sido acreditada de manera alguna la publicación y veracidad de la supuesta normativa por parte del municipio y afirma que la sentencia impugnada falta a la verdad porque la Cámara asevera que las ordenanzas 524/07 y 528/07 le han sido notificadas a su parte, cuando -alega- no existe ninguna prueba de ello.

Aduce que los argumentos de la sentencia no justifican la falta de acatamiento de la doctrina judicial que se desprende del fallo de la Corte nacional "Municipalidad de Berasategui" y que la exigencia de publicidad de la ley para que sea obligatoria es extensible a las Ordenanzas del caso y resulta indispensable para su obligatoriedad.

Arguye que la Cámara confirmó la pretensión fiscal del Municipio pese a que el mismo no prestó ningún servicio a la empresa y al respecto, alega que en la etapa administrativa y al contestar la demanda, la Municipalidad de Roldán sostuvo la prestación de servicios; pero luego viró su postura al presentar alegatos y afirmó que no podía brindar servicios porque Telecom Personal S.A. nunca había solicitado la habilitación de la antena, lo que encontró apoyo en la sentencia ahora impugnada, que -dice- forzó la interpretación de los hechos del caso para convalidar la pretensión fiscal.

Señala que para prestar sus servicios el Municipio no necesita de ninguna acción previa por parte de la empresa y que de ninguna norma se desprende que la falta de habilitación de una Estructura soporte de antenas acarrea la dispensa del Municipio de prestar servicios.

Se disconforma con lo resuelto en torno al planteo de la inconstitucionalidad e ilegal delegación efectuada por el Municipio en empresa privada puesto que considera que los textos acompañados son prueba contundente y que el Tribunal ha omitido considerar la restante prueba aportada por la empresa.

Respecto de lo decidido por la Cámara sobre el planteo de nulidad por falta de motivación del

decreto, con relación a los dictámenes, expone que debe existir una expresa derivación o remisión y no la mera expresión de que "puede haber servido" como motivación y entiende que el dictamen no expresa los motivos por los cuales se rechaza parcialmente el recurso de reconsideración presentado.

En cuanto a la desestimación del planteo de inconstitucionalidad de la pretensión fiscal por oponerse al derecho federal y por inexistencia de potestades del municipio, afirma que los tributos reclamados no surgen del Código Fiscal y que la contradicción entre la normativa municipal y la provincial es evidente.

Por otro lado, estima que la irrazonabilidad de los importes pretendidos debía juzgarse en el caso concreto y que su parte es la única que aportó prueba al respecto, la cual fuera simplemente desestimada por la sentencia con una mera afirmación.

Insiste en la violación de la ley de Coparticipación Federal y enfatiza que el Fisco comunal esta gravando su actividad y disminuyendo su ganancia con una doble imposición fiscal vedada por dicha ley.

Por último, en lo relativo a los intereses, invoca la mora no culpable, solicitando que para el caso en que se resuelva confirmar la determinación practicada por el Municipio, se ordene que no se apliquen intereses atento al principio de la mora no culposa del artículo 509 del anterior Código Civil y artículo 888 del actual Código Civil y Comercial de la Nación.

2. Por auto 330 del 26 de julio de 2019 la Cámara denegó la concesión de los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por entender en definitiva que no había podido rebatir los fundamentos dados por el Tribunal en la sentencia impugnada, resultando los agravios de la impugnante la reiteración de planteos ya expuestos y analizados adecuadamente por el Tribunal, revelando la sola discrepancia con el criterio adoptado por la Cámara en cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normativa aplicable, aspectos propios de los jueces ordinarios y, por ello, ajenos a la vía intentada (fs. 83/87v.).

Ello motivó la presentación en queja ante esta Corte (fs. 92/117).

3. En primer término corresponde realizar algunas precisiones respecto del alcance de la impugnación intentada.

3.1. En tal sentido cabe aclarar liminarmente, que advirtiéndose que la actora presenta sus recursos de inconstitucionalidad y conjunta casación "puesto que la sentencia...no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia" (f. 47), se enfocarán la totalidad de los planteos formulados por Telecom Personal S.A. bajo el régimen del recurso de inconstitucionalidad local.

3.2. Sentado ello, y dando por satisfechos los recaudos formales de la presente impugnación, corresponde ingresar al análisis de los cuestionamientos de la empresa recurrente.

En dicha tarea, ha de concluirse que los remedios interpuestos por Telecom Personal S.A. no pueden prosperar habida cuenta que, al penetrar en el ámbito de lo sustancial -con las limitaciones propias de este estadio- del memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad y casación en confrontación con lo resuelto en la sentencia impugnada, se advierte que los planteos que la compareciente intenta encuadrar en hipótesis conculcatorias de garantías constitucionales carecen de consistencia y no alcanzan a persuadir de que se configure un caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

En primer lugar, el agravio de Telecom Personal que afirma que la sentencia dejó de lado la multa, acotó el debate a la procedencia del tributo tasa de inspección de antenas y desconoció lo que la recurrente planteó en el expediente N° 130/15 sobre medida cautelar, no puede prosperar.

Recuérdese que en la presente causa Telecom Personal S.A. interpuso su recurso contencioso administrativo contra el decreto n° 1214/15 de la Municipalidad de Roldán de fecha 25.08.2015, que resolvió dejar sin efecto las disposiciones de la Resolución N° 1003/15, la que -a su hora- había rechazado parcialmente el recurso de reconsideración presentado contra el Decreto N° 1002/15 del Municipio, que intimaba al pago de los montos siguientes: \$339.946,67 en concepto de tasas municipales de habilitación e inspección períodos fiscales 2007 a 2014; multa de \$100.000 en razón de la falta de regularización técnica y multa por defraudación por la suma de \$3.399.466,70.

Al respecto, los Camaristas comenzaron el análisis de la causa reiterando y aclarando que por medio del Decreto 1214/15 el Intendente municipal dispuso dejar sin efecto las disposiciones de la Resolución municipal n° 1003/15 y ordenó se proceda al recálculo de los intereses, reclamando a Telecom Personal S.A. las tasas adeudadas y los intereses que pudieran corresponder, empero no aplicó la multa prevista en el artículo 42 de la ley 8173.

Luego, la Cámara juzgó que confrontado lo dispuesto en el Decreto 1214/15 con la pretensión articulada en autos, "es posible puntualizar que el debate ha quedado acotado a la procedencia del tributo por inspección de antenas por el período 2010/2014" y que no se discute en autos por el período anterior, ni tampoco en relación a la tasa de habilitación, ni en punto a la multa



por defraudación que expresamente fue dejada sin efecto.

Pese a lo expuesto, la actora insiste en intercalar con las cuestiones actuales otras cuestiones que fueron objeto de procesos anteriores ya firmes y consentidos mas no se hace cargo de lo expuesto por los Sentenciantes que delimitaron la materia litigiosa en torno a la legitimidad de la tasa por inspección de antenas respecto del período fiscal 2010 a 2014 en razón de que todo lo relacionado con la multa dispuesta por resolución 1003/15 se resolvió con el dictado del decreto 1214/15 del Intendente municipal que la dejó expresamente sin efecto.

Circumscripta la cuestión, a lo que ahora resulta de interés, concretamente los reproches formulados al pronunciamiento impugnado denotan el disenso en torno a la tesis sostenida por los Sentenciantes, quienes analizaron la situación planteada en autos y llegaron a la conclusión de que, en el caso, el tributo por inspección de antenas por el período 2010/2014 resultaba legítimo, ya que las prescripciones de las Ordenanzas de Roldán N° 524/07 y 528/07, no traspasaban los límites que el Municipio tiene impuestos, en tanto se correspondían con atribuciones inherentes a los mismos; que el establecimiento de requisitos para la instalación de antenas resultaba competencia de la autoridad municipal; que la jurisprudencia tiene resuelto uniformemente que es competencia de los municipios el permiso y habilitación para la instalación de antenas para difusión del servicio de telefonía celular y que, en definitiva, la norma cuestionada resultaba del legítimo ejercicio del Poder de Policía municipal de la Municipalidad de Roldán en materia de higiene seguridad, orden social y ambiental (arts. 39, inc. 27, ley 2756 y 41, C.N.) no resultando un ejercicio arbitrario de tal potestad.

Y, lo cierto es que, la recurrente con sus alegaciones, que pueden subsumirse en supuestos de arbitrariedad normativa, fáctica y probatoria de las que -dice- adolecería el fallo, no consigue acreditar que los vicios que invoca se configuren en autos, sin lograr traspasar el límite de la mera discrepancia en torno a la apreciación que del material probatorio y de las constancias de la causa efectuó la Cámara, quien juzgó, en definitiva, que se hallaba suficientemente acreditado que, en el caso concreto, no constaba el respectivo pedido por parte de la empresa con el cumplimiento de los requisitos puntualizados en el artículo 1 de la Ordenanza 524/07 (requisitos que las empresas de telefonía celular deben cumplimentar a los efectos de solicitar la habilitación para las respectivas instalaciones) poniendo especial énfasis en que dicho incumplimiento por parte de Telecom Personal S.A. contrastaba con lo ocurrido en otras jurisdicciones en las que la empresa solicitó la correspondiente habilitación y abonó las respectivas gabelas.

Por otra parte, frente a la impugnación de la quejosa en torno a la inconstitucionalidad de la

pretensión fiscal por oponerse al derecho federal y por inexistencia de potestades del Municipio de Roldán, la Cámara juzgó que "son atribuciones municipales la reglamentación y control de la construcción de edificios públicos y particulares con el fin de garantizar la solidez, higiene, etcétera (art. 39, inc. 27 ley 2756), además de las atribuciones que en materia de seguridad y orden social el derecho objetivo reconoce a los Municipios (art. 39, citado). Incluso, en el terreno ambiental, las Provincias y Municipios pueden establecer mayores niveles de protección, esto es, fijar estándares más rigurosos o severos que los prescriptos por el ordenamiento federal" (cfr. f. 24v.).

Sobre el punto, los Sentenciantes recordaron lo expuesto por la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Roldán cuando expresó que "ante la existencia de un conjunto de antenas instaladas en una estructura que le sirve de soporte, el Municipio debe controlar que dicha estructura verifique que se cumplan las normas constructivas municipales, que las antenas estén instaladas en un lugar permitido dentro del ordenamiento territorial dispuesto en las ordenanzas locales, que estas estructuras y equipos no representen un peligro para los vecinos de la Comuna, etcétera" y que "...la Comisión Nacional de Comunicaciones no tiene competencia sobre la obra civil relacionada con la estructura soporte de la antena, por lo que no puede ejercer jurisdicción sobre las mismas, siendo un tema que le compete al ente Municipal". Asimismo, la Cámara señaló que en la contestación de la demanda, la Municipalidad de Roldán hizo notar que si a causa de una deficiencia en la construcción de la elevada antena se desplomara ésta matando a un vecino respondería civilmente la Municipalidad de Roldán por omisión de control.

Frente a tales argumentos de los Sentenciantes, la compareciente insiste en que no correspondería a la Municipalidad de Roldán el ejercicio del poder de policía para habilitar, inspeccionar y/o controlar la actividad de telecomunicaciones desarrollada y/o sus instalaciones, sino a la Comisión Nacional de Comunicaciones, en oposición al criterio de la Alzada, que rebatió tales reproches destacando lo dicho por la Corte federal en referencia al artículo 41 de la Constitución nacional en autos "Villivar" (del 17.4.2007) respecto de que "complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la reglamentación complementada" (...) "de ahí que en este ámbito no cuadre predicar una 'exclusividad' del organismo nacional por cuanto la 'complementación' viene constitucionalmente impuesta (art. 41 CN)" (cfr. f. 25), ello con cita de jurisprudencia en la materia que reafirma las atribuciones municipales en este terreno.

Esta Corte ya ha dicho al respecto, que tal concurrencia o complementación, al margen de que

pueda, eventualmente y frente a casos concretos, generar conflictos respecto de la dilucidación de sus concretos alcances, basta, se reitera, para disipar el agravio genéricamente planteado en el presente recurso.

Por otro lado, la recurrente repele el cobro de la tasa invocando la violación del principio de defensa en juicio por falta de publicación de las supuestas normas pero no logra conmover los fundamentos que brindó la Cámara al dar tratamiento adecuado a la defensa de Telecom Personal S.A.

En efecto: el Tribunal analizó que el fallo del Alto Tribunal nacional invocado por la actora ("Municipalidad de Berazategui", del 27 de setiembre de 2018), no resultaba sin más trasladable a la realidad del caso que exhibía aspectos jurídicos y fácticos propios y diferenciables de los que pudieron haber deparado otras actuaciones, sin que pueda pasar desapercibido que los Sentenciantes pusieron de resalto que la Municipalidad notificó a la empresa las Ordenanzas municipales 524/07 y 528/07 y que "...ya con la sustanciación de los anteriores expedientes habidos entre las mismas partes aquí contendientes, mal puede decir la empresa que no conoce el íntegro texto de las ordenanzas precipuas, máxime cuando de la voluminosa pieza de la demanda se desgrana un conocimiento acabado de sus disposiciones" (fs. 22v./23) no logrando la recurrente -con sus alegaciones genéricas y la jurisprudencia que invoca- conmover la comprobada existencia de anoticiamiento cabal de la normativa en cuestión.

En otro orden de ideas, la compareciente achaca al fallo impugnado el haber incurrido en autocontradicción y contener falsas afirmaciones, insistiendo en la inconstitucionalidad de la tasa de inspección de antenas, la que no surge "taxativamente" del Código Fiscal Municipal aprobado por la ley 8173, más lo cierto es que no logra rebatir con sus genéricas afirmaciones lo argumentado por la Cámara al respecto de la interpretación amplia que el Tribunal propugna en consonancia con la doctrina aplicable.

En efecto, el Tribunal comenzó recordando la amplitud del artículo 107 de nuestra Constitución provincial y señaló que la posterior ley 8173 no significó que los Municipios debieran igualar o reproducir ad pedem litterae lo prescripto por ella con una copia exacta de los tributos allí diseñados para concluir que los Municipios no están obligados a seguir a pie juntillas las disposiciones de la ley 8173 aunque tienen ciertamente contornos definidos a la hora de establecer sus tributos y que no pueden traspasar, no pudiendo dictar normativas que resulten inconciliables con las prescripciones de la ley 8173. Asimismo, ponderó que la ley 8173 es anterior a la reforma constitucional de 1994 la que conduce a una ampliación de las

potestades tributarias de los Municipios e indicó que la lectura e interpretación que se efectúe de la ley 8173 debe ser leída en clave constitucional, es decir, en el supuesto en el que la norma de inferior grado resulta ser más antigua que las de mayor jerarquía "...Esta circunstancia no invalida per se a la normativa local (constitucional e infraconstitucional) concernida, pero exige realizar esfuerzos interpretativos constantes para conciliar lo que pueda ser jurídicamente conciliable y a estar permanentemente 'en guardia' para no convalidar situaciones que puedan resultar jurídicamente inconciliables" (f. 28). Por último, la Cámara mencionó la jurisprudencia de Superiores Tribunales provinciales que armonizan con la interpretación amplia que se propugna.

Seguidamente, en cuanto a la falta de prestación de servicios que aduce Telecom Personal S.A., los Juzgadores pusieron de resalto que, aunque la recurrente lo negó, "...se comprobaron, a partir del año 2008, actos de la administración, verificaciones y requerimientos" remitiendo al detalle de dichos actos que la Cámara había realizado en el considerando número 5°. Asimismo, el Tribunal afirmó que una vez verificada la registración, inscripción o habilitación respectiva, allí sí, la exigencia de la prestación de servicios resulta ineludible, pero si no se configuraban esas imprescindibles formalidades no podía requerirse "...más que el ejercicio de un genérico poder de policía contingente, circunstancial y no uniforme" (f. 29).

Debe señalarse que respecto de esa supuesta falta y atento al alcance dado al término "efectiva prestación del servicio" por la jurisprudencia de esta Corte (A. y S. T. 278, págs. 57/61; T. 133., págs. 258/279), luce suficientemente acreditada la prestación potencial del servicio por parte de la Municipalidad de Roldán para hacer nacer la obligación a cargo del contribuyente, no logrando la recurrente en este caso desmerecer las argumentaciones expuestas por la Cámara cuando sostuvo la exigibilidad del cobro de la tasa por haber acreditado el Fisco realizar actos de la administración, verificaciones y requerimientos propias de la tarea de inspección de estructuras soporte de antenas de la actora.

Al respecto cabe recordar que a los fines de la exigibilidad del cobro de la tasa se ha entendido suficiente la organización del servicio, así como su ofrecimiento a los eventuales contribuyentes, resultando legítimo su cobro desde el momento en que el Fisco incurre en erogaciones para organizar la prestación, la que debe encontrarse a disposición de los particulares, independientemente del uso efectivo que de ella realicen (cfr. Villegas, Héctor "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2016, pág. 135). Con mayor peso argumentativo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del

particular, éste no puede rehusar su pago (de las tasas) aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en miras el interés general" (Fallos:251:50; 312:1575; 323:3770; 326:4251, entre otros).

En suma, esta Corte provincial -aunque refiriendo a la percepción del Derecho de Registro e Inspección- ha analizado la exigencia o no de la efectiva prestación del servicio, considerando que la tasa no es sin más ilegítima si en el período que se reclama el servicio efectivamente no se prestó, siempre que la Administración "prima facie" cuente con las estructuras adecuadas para la prestación del servicio ("Arenera de la Cruz y Rozas S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción", A. y S. T. 104, págs. 84/91), perdiendo entonces decisividad, en el "sub judice", lo manifestado por la actora.

En torno a la alegada irrazonabilidad de los importes pretendidos, los Camaristas consideraron que la suma de \$1.500 por mes establecida por Ordenanza 528/07 no resultaba irrazonable o desproporcionada según los criterios consolidados en jurisprudencia que consideró aplicables al caso.

Respecto a la supuesta violación de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la Cámara recordó que la obligación de no gravar establecida por la ley deja a salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados; que en la especie ya se había explicado que no se requirió habilitación correspondiente y que no podía afirmarse que no se han prestado servicios, para concluir que no se había demostrado acabadamente que la Municipalidad haya gravado con un tributo local la materia gravada por un tributo nacional.

Por último, en cuanto a la mora no culpable que propuso Telecom Personal S.A. para eximirse de los intereses, la Cámara desestimó tal argumento recordando que tales intereses no constituyen, en principio, una sanción sino resarcimiento de daños e indemnización del daño moratorio y que su fin consiste en la reparación, y dió expreso tratamiento a las referencias del recurrente sobre su "actitud prudente y diligente", en respuesta a las cuales el Tribunal resolvió que "...la posición clásica bordada alrededor del art. 509 del Código Civil ha dejado paso a una cada vez más nutrida doctrina en el sentido que los supuestos más importantes y frecuentes se caracterizan por la presencia de un factor objetivo de atribución y son, consecuentemente, hipótesis de mora objetiva, posición esta última que había sido sostenida ya alrededor del mencionado art. 509 y, a fortiori, en relación al art. 888 del nuevo Código Civil y Comercial" (f. 31), lo que deja sin sustento los reproches sobre omisión de adecuado tratamiento de este agravio.

Frente a todo ello, la quejosa no endereza crítica constitucional atendible, sino que se limita a

argumentar que la Cámara, al denegar el remedio extraordinario, dejó sin analizar debidamente sus planteos abstractos de arbitrariedad normativa, fáctica y probatoria, pero de la lectura del pronunciamiento atacado en confrontación con el escrito de queja ello no es lo que se desprende de la sentencia impugnada.

En efecto, los Sentenciantes lejos de desentenderse de los elementos de convicción aportados, realizaron determinadas aclaraciones en la sentencia impugnada respecto de algunos elementos probatorios a los cuales le atribuyeron un alcance distinto al pretendido por la actora. Así, en torno a la alegada falta de prestación de servicio y el supuesto desmonte de la antena a fines del año 2013, la Cámara ponderó especialmente el informe de desmantelamiento que acompañó la empresa en copias certificadas a fojas 98/101 -que indicaba "se desmanteló mástil" suscripto por el apoderado de Instal Electric Telecomunicaciones S.A. y unas fotografías- y consideró, luego de realizar algunas aclaraciones sobre el valor probatorio que cabe otorgar a las fotografías y a los documentos privados, que de todas maneras, esa prueba no favorecía a la recurrente ya que resultaba insuficiente, en tanto no demostraba acabadamente que "...el desmonte de la estructura sea total, el estado actual de la misma y su entorno, así como tampoco suministra criterios nítidos para acreditar que se le haya permitido a la Municipalidad ejercitar en dicha oportunidad una adecuada actividad fiscalizadora" (fs. 29v./30).

Por otro lado, el Tribunal desestimó en la sentencia cuestionada la señalada delegación, al considerar que no se habían arrimado a la causa elementos suficientes que permitan comprobarla, ni era dable extraerla de la sola e hipotética coincidencia de los textos empleados con los fundamentos volcados en resoluciones de Municipios de otras Provincias.

Respecto del agravio sobre falta de motivación del decreto que confirma la pretensión fiscal impugnada, surge del fallo cuestionado que los Jueces, analizaron los considerandos del mismo, el dictamen de agosto de 2015 y en particular el dictamen producido por la Asesoría Letrada en ocasión de recomendar el rechazo del recurso de reconsideración, concluyendo que resultaba legítimo el accionar de la Administración en tanto el acto administrativo atacado -decreto N° 1214/14- se ajustaba a derecho, tenía fundamentación contextual y motivación per relationem e in aliunde, en un todo acorde con la reiterada jurisprudencia de esta Corte, que ha admitido dicha fundamentación como "motivación suficiente" en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial.

Por último, los Camaristas en el auto denegatorio, enumeraron y transcribieron cada uno de los agravios planteados por la empresa recurrente, señalando que resultaban la reiteración de

planteos ya expuestos y analizados adecuadamente por el Tribunal (cfr. f. 87).

Las restantes causales de arbitrariedad que Telecom Personal S.A. pretende configuradas, no merecen mejor suerte y se diluyen a poco que se analice la exigencia del artículo 95 de la Constitución provincial referente a la motivación bastante de las resoluciones que no impone al Juzgador desarrollos minuciosos, bastando que mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma, como un pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (A. y S. T. 65, pág. 45 y T. 104, pág. 332, entre otros).

Todo lo expuesto basta para determinar el rechazo de la presente queja.

Por lo tanto, los argumentos de la compareciente, tal como fueran traídos a consideración, sólo configuran la insistencia de sus alegaciones ya plasmadas en sus recursos de inconstitucionalidad y casación en base a la singular interpretación de las circunstancias fácticas y de las constancias de la causa, no demostrando, en las particularidades del caso, cómo se habría configurado la arbitrariedad que aduce ni tampoco la decisividad de sus planteos, ello a fin de lograr la descalificación constitucional de lo decidido.

De tal manera, al no lograr la quejosa demostrar siquiera en grado liminar la configuración de algún supuesto hábil para franquear la instancia extraordinaria intentada, no alcanza a persuadir acerca de la conexión inexorable que debe existir entre los hechos relevantes de la causa y la cuestión constitucional que enuncia, limitándose a efectuar una mera invocación global de agravios en torno a cuestiones que resultan propias del ámbito reservado a los jueces de la causa, en el particular, los Tribunales especializados en lo Contencioso Administrativo y que, como tales, son ajenas a la órbita excepcional del remedio intentado.

Con lo cual, y más allá del mayor o menor grado de acierto, la conclusión a la que arribara la Cámara podrá ser o no compartida por la recurrente pero, en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción, no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA  
(SECRETARIA)

Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Rosario -integrada-.